

Imprimir

La reciente decisión del Banco de la República de elevar la tasa de interés al 11,25% reactivó un debate que va mucho más allá de unas décimas arriba o abajo. No se trata únicamente de política monetaria, sino de algo mucho más profundo relacionado con quién decide sobre la economía y bajo qué criterios. En medio de esta discusión, un grupo de decanos de facultades de economía de siete universidades privadas (Andes, Javeriana, Rosario, Externado, Icesi, Eafit y Autónoma de Bucaramanga), salió en defensa del Banco mediante un comunicado que, sin proponérselo, terminó revelando la lógica misma de la tecnocracia. El documento insiste en la necesidad de preservar la independencia del Banco y exalta la calidad de su equipo técnico, al que describe como uno de los mejores del mundo. Hasta ahí, podría pensarse que se trata de una defensa institucional sin más. Sin embargo, lo verdaderamente significativo no es lo que dice explícitamente, sino lo que deja por fuera. No hay una sola línea dedicada a discutir los efectos concretos de la decisión: el impacto sobre el crédito, el empleo, la inversión o las condiciones de vida de millones de personas. El debate se desplaza así del terreno de las consecuencias sociales al de la autoridad técnica.

Ese desplazamiento no es casual. Cuando una decisión económica se legitima por la calidad de quienes la toman y no por la discusión de sus efectos, lo que se está afirmando es que existe una racionalidad superior que no necesita ser discutida. La tecnocracia no se presenta como una postura entre otras, sino como la forma correcta —y única— de administrar *la* economía. En ese punto, la autonomía del Banco deja de ser un diseño institucional sujeto a deliberación y se convierte en un principio incuestionable.

Pero el momento más revelador del comunicado aparece hacia el final, cuando los firmantes aseveran que en sus universidades “entrenan economistas en sólidos métodos de análisis”. La palabra no es menor. Entrenar no es lo mismo que formar, y en esa diferencia se juega buena parte del problema.

Entrenar implica optimizar habilidades dentro de un marco previamente dado. Es un proceso orientado a la repetición, la eficiencia y la aplicación de métodos definidos. Se entrena a un operario, a un deportista, incluso a un algoritmo. Formar, en cambio, supone algo distinto:

desarrollar la capacidad de pensar, de juzgar, de cuestionar los supuestos mismos sobre los cuales operan esos métodos. La formación no se limita a resolver problemas dentro de un esquema, sino que abre la posibilidad de interrogar el esquema mismo.

Cuando una universidad confiesa que entrena en lugar de formar, está revelando una concepción instrumental del conocimiento. Ya no se trata de producir sujetos críticos, sino de fabricar diestros operadores competentes en el manejo de un conjunto de herramientas. El economista así entrenado no está llamado a deliberar sobre los fines sociales de la política económica, sino a utilizar los instrumentos que un determinado paradigma o modelo considera correctos.

Esto ayuda a entender por qué el debate sobre la tasa de interés se clausura tan rápidamente en nombre de la técnica. Si quienes toman decisiones y quienes las legitiman han sido entrenados en un mismo marco, la posibilidad de cuestionarlo desde dentro se reduce al mínimo. La discusión pública queda entonces desplazada: ya no se trata de evaluar alternativas, sino de aceptar o no la autoridad de quienes “saben”.

El problema no es la existencia de expertos, sino que se haya naturalizado una forma de producirlos que sustituye la formación crítica por el entrenamiento técnico, con lo cual se desplaza la deliberación democrática sobre la economía. Y esta, a pesar de ser una ciencia social, deviene un saber indiscutible y neutral que se sustrae al conflicto político que inevitablemente atraviesa las decisiones económicas. Subir o bajar una tasa de interés no es un acto neutro porque afecta de manera distinta a deudores y acreedores, a pequeños empresarios y grandes capitales, al empleo y al crecimiento. Decidir sobre ello es, en última instancia, tomar partido.

En ese sentido, la tecnocracia no elimina la ideología, la vuelve incuestionable y la oculta bajo el lenguaje de la técnica. Y la universidad, cuando renuncia a formar pensamiento crítico y se limita a entrenar, se convierte en el principal dispositivo de reproducción de ese orden. No produce ciudadanos capaces de interpelar el poder económico, sino especialistas encargados de administrarlo.

En el último párrafo, el comunicado afirma: “Respaldamos su labor [la del banco] y afirmamos nuestra confianza en el sistema que hemos diseñado, de un banco central independiente con un claro mandato para mantener en el tiempo la credibilidad de nuestra moneda”. Se sacraliza la independencia y se defiende como valor supremo. ¿Independientes de quién o respecto a qué? Independientes del actual gobierno, pero alineado con una doctrina económica que los determina. “El sistema que hemos diseñado”, dicen. Esto da idea de autoría, control y gobierno de la tecnocracia que indica un cierre del circuito del poder que puede ser leído así “i) Nosotros entrenamos economistas; ii) esos economistas gobiernan el banco; iii) el banco toma decisiones correctas; iv) luego, el sistema funciona bien. Es un circuito cerrado de autovalidación.

La discusión actual no debe agotarse en la defensa o crítica puntual de una decisión del Banco de la República. Lo que está en juego es algo más amplio que apunta a la relación entre conocimiento, poder y democracia. Si las decisiones que afectan la vida de millones de personas quedan en las manos de una racionalidad que no se deja cuestionar, la política se vacía de contenido y la democracia se reduce a un procedimiento formal.

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿puede una democracia aceptar que sus decisiones económicas fundamentales estén en manos de técnicos entrenados para no cuestionar el marco en el que operan, en lugar de ciudadanos formados para deliberar sobre él?

David Rico Palacio

Foto tomada de: El País